

NOMENCLATURA	: 1. [40]Sentencia
JUZGADO	: 7º Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL	: C-6074-2022
CARATULADO	: BURGOS/FISCO -C.D.E.

Santiago, nueve de Febrero de dos mil veinticuatro

**VISTO:**

A folio 1, con fecha 22 de junio de 2022, comparece don NICOLÁS ALBERTO LEAL SEPÚLVEDA, abogado, en representación de don **NÉSTOR CIRO BURGOS SAAVEDRA**, cédula nacional de identidad número 4.456.004-6, doña **LIDIA DEL CARMEN GONZALEZ MENA**, cédula de identidad número 7.292.723-0 y doña **PAMELA BEATRIZ BURGOS GONZALEZ**, cédula de identidad número 15.298.361-1, todos con domicilio en calle Bandera, número 236 Subterráneo, comuna de Santiago, interponiendo demanda de indemnización de perjuicios en contra del **FISCO DE CHILE**, representado- en su calidad de Presidente del Consejo de Defensa del Estado- por Juan Antonio Peribonio Poduje, abogado, domiciliado en calle Agustinas N°1687, comuna de Santiago.

Señala que el demandante se encuentra calificado como víctima en el listado de prisioneros políticos y torturados, elaborado por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, establecida en el Decreto Supremo N°43, del año 2010, conocido como Comisión Valech I bajo el número 3583 en dicho listado. Por su parte los demandantes por repercusión doña Lidia del Carmen González Mena, es cónyuge del demandante principal en autos y doña Pamela Beatriz Burgos González es hija del demandante principal.

Relata el demandante principal que en el año 1973 era secretario seccional del partido socialista, siendo detenido el 20 de septiembre por



Foja: 1

policías de investigaciones, para posteriormente ser trasladado al cuartel de investigaciones donde estuvo hasta el 18 de octubre. Luego de ello, expone que fue nuevamente trasladado esta vez al campo de prisioneros en el cuartel del regimiento de Los Ángeles, donde fue torturado, aplicándole corriente en los genitales, le colgaban de los pies, lo golpeaban reiteradas veces por todo su cuerpo llegando incluso a fracturarle la quinta vértebra cervical a raíz de un golpe con una culta de una cabina. Agrega, que durante la detención era sacado junto a otros detenidos para hacer trabajos forzados en el estadio de Los Ángeles y en la Laguna Esmeralda.

Sostiene que fue retenido hasta el 19 de diciembre, estando un total de 2 meses y 29 días detenido, sufriendo en la actualidad de secuelas tanto psicológicas como físicas, a raíz de los hechos relatados.

Seguidamente relata la demandante doña Lidia Del Carmen González Mena, que lleva 50 años junto al demandante principal y que al momento del golpe estaban esperando su primer hijo quien nació el 11 de noviembre de 1973. Manifiesta que el demandante principal se encontraba detenido en el regimiento número 17 de la ciudad de Los Ángeles, tenía muy poca información acerca de él y cada vez que se acercaba a pedir información los militares se reían, pudiendo conocer don Néstor Ciro Burgos Saavedra a su hijo solo cuando éste ya tenía un mes de vida.

Por último, la demandante doña Pamela Beatriz Burgos González declara que sus padres siempre estaban con miedo a consecuencia de la detención de su papá y las torturas físicas y psicológicas a las que fue sometido.

Añade que antes de la dictadura tenían muy buen pasar en Los Ángeles, pero después de la detención perdieron todo y tuvieron que irse a Puerto Montt donde unos amigos.

Relata la frustración dolor e impotencia vivida a partir de la dictadura vivida en Chile, y las consecuencias físicas y psicológicas que hasta el día de hoy observa en su padre.

En cuanto al Derecho, se indica que los antecedentes previamente consignados forman parte del catálogo de crímenes reconocidos en la comunidad internacional como “crímenes de lesa humanidad”, según lo establecido en el



Foja: 1

Estatuto del Tribunal Militar de Nüremberg de 1945, declaración confirmada por las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas con fecha 13 de febrero y 11 de diciembre, ambas de 1946, y que ha sido actualizado con la adopción del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional aprobada en 1998, crímenes que han hecho surgir un complejo normativo especial en el ámbito del Derecho Internacional, cuya identificación resulta fundamental para resolver qué clase de responsabilidad le cabe al Estado de Chile en el caso de autos, citando y reproduciendo lo resuelto por la Iltna. Corte de Apelaciones de Santiago en los autos rol N°4.464-01, considerando N°2.

Alega que el fundamento básico de esta responsabilidad legal o extracontractual del Estado está contenido en diversas disposiciones de rango constitucional, supraconstitucional y también legal, todas las cuales son normas propias del ámbito del Derecho Público, mencionando además los artículos 1 inciso cuarto, 5, 6, 7 y 38 de la Carta Magna, normas que establecen los principios de la primacía constitucional y de juridicidad, respectivamente, y conforman el denominado estatuto de la responsabilidad extracontractual del Estado, responsabilidad que emana de la naturaleza misma del ente estatal como persona jurídica compleja creada para la realización del bien común.

Seguidamente, hace referencia a la responsabilidad del Estado en la esfera del Derecho Internacional, señalando que el estado de Chile mediante la suscripción de declaraciones y convenciones a nivel internacional así como concurriendo con su voto en la aprobación de múltiples resoluciones por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas y de la Organización de los Estados Americanos, o bien mediante la vigencia de la costumbre internacional y los principios generales del derecho reconocidos por las naciones civilizadas, ha ido adquiriendo en forma progresiva una serie de obligaciones que responden a la obligación general de “respeto de los derechos esenciales del hombre” por parte de los Estados que emana, entre otros, de los artículos 3.K, 16, 17, 32, 44, 45, 46 y 136 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, en concordancia con los preceptos de la Carta de las Naciones Unidas, de la Declaración Americana de los



Foja: 1

Derecho y Deberes del Hombre, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, del Pacto de Derechos Civiles y Políticos y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Sostiene que la responsabilidad del Estado por violación de los derechos humanos es una responsabilidad objetiva en donde no interesa la presencia de dolo o culpa en el accionar dañoso del Estado. Reseña que la responsabilidad internacional del Estado nace al momento en que con su actuar se infringen los límites que le señalan los derechos humanos como atributos inherentes a la dignidad de las personas, sin necesidad de que exista falta o culpa por parte del autor material del acto. Finalmente fundamenta esta interpretación normativa en lo dispuesto en el artículo 19 de la Constitución Política de la República en relación con lo prevenido en el artículo 5°, inciso 2° de la carta magna, invocando además los artículos 1° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 19, N°20 de la carta fundamental.

Arguye que la correcta resolución del caso sub-lite requiere la aplicación armónica de la Constitución Política, de los tratados internacionales sobre derechos humanos y de la Ley de Bases de la Administración del Estado, siendo improcedentes las reglas propias del derecho de daños contenidas en el Código Civil, toda vez que dicho estatuto se construye sobre premisas y principios diferentes a los del Derecho Público y al Derecho Internacional de los Derechos Humanos y a, constituyendo un error de lógica y sistemática jurídica la aplicación de normas de Derecho Privado a las situaciones en que se persigue la responsabilidad del Estado por actos dañosos constitutivos de delitos de lesa humanidad, ya que ambos difieren en su naturaleza y fines, destinado a otras conductas e intereses.

En ese sentido, cita y reproduce lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Loayza Tamayo y por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago en causa Rol N°6715-2002, concluyendo que el derecho de daños del Código Civil chileno es insuficiente para resolver conflictos que versan sobre violaciones a los derechos fundamentales de la persona humana.

Por otro lado, hace presente que al reconocer que los crímenes de lesa humanidad se encuentran regulados según normas de carácter público e



Foja: 1

internacional por sobre el Derecho Privado, no solo cabe afirmar el carácter objetivo de la responsabilidad de Estado, sino además la imprescriptibilidad de las acciones patrimoniales derivadas de las violaciones a los derechos humanos.

Asevera que la Convención Americana sobre Derechos Humanos señala con claridad la existencia del deber de reparar que se le impone a todo Estado que haya sido responsable de violar alguno de los derechos fundamentales de la persona humana que se encuentren garantizados por dicha convención, y si bien es cierto que en ninguna disposición de la Convención Americana se señala de modo expreso la imprescriptibilidad de las acciones civiles, la ausencia de regulación jurídica expresa le impone al juez la tarea de interpretar e integrar la normativa existente con los correspondientes principios generales del Derecho que, en el caso concreto, orientan al Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

Concluye que el fundamento en virtud del cual un Estado queda obligado a la ejecución de una reparación determinada frente a una persona que haya sido víctima de violaciones a sus derechos fundamentales mediante ilícitos que la conciencia jurídica universal considera intolerables, se rige por normas y principios del derecho público e internacional de los derechos humanos logrando sujetar dentro de sus esferas, por vía de la progresividad normativa, un sistema de responsabilidad autónomo que se conforma transversalmente desde los primeros acuerdos interestatales.

Posteriormente cita lo resuelto por la Excma. Corte suprema en los autos Rol N°4662-2007, 6308-2007, 4723-2007, 5831-2013, 1813-2014, 4300-2014, 7735-2015, 7961-2015 y 30598-2015.

Reitera que para la determinación de la procedencia de la responsabilidad del Estado no es necesaria la acreditación del elemento subjetivo, puesto que dichos elementos no pueden encontrarse en una persona sin sentimientos, como lo es el Estado o su administración, de modo tal, que el agraviado debe probar únicamente la existencia del daño o perjuicio provocado y la actividad del órgano del Estado que lo general, y desde luego la relación de causalidad.



Foja: 1

En cuanto al daño o lesión, arguye sobre la procedencia del daño moral en el marco de la responsabilidad, la cual encuentra su fundamento en la propia Carta Fundamental.

En lo que refiere a la causalidad, señala que se encuentra fehacientemente acreditada en autos, siendo el propio demandado quien ha reconocido al demandante la calidad de torturado según se desprende la informe emitido por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura con el número de identificación 3583.

A mayor abundamiento, hace mención a lo que entiende por daño moral la doctrina y jurisprudencia nacional y sus elementos probatorios, en especial, lo señalado por la Excma. Corte Suprema. Asimismo, cita jurisprudencia en el derecho internacional, en particular, lo resuelto en diversas sentencias por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, reafirmando la idea de que el daño moral no requiera prueba en sede jurisdiccional.

Previas citas legales, solicita se condene a la demandada por la suma de \$200.000.000 (doscientos millones de pesos) para el demandante principal, y el monto de \$100.000.000 (cien millones de pesos) para cada demandante por repercusión, o bien en su defecto, a la suma que el tribunal considere en justicia, cantidad que deberá ser reajustada de acuerdo a la variación del IPC, desde la fecha de interposición de esta demanda y el pago efectivo de la indemnización, junto con los intereses legales correspondientes durante el mismo período y las costas de la causa.

A folio 7, con fecha 25 de agosto de 2022, se notificó la demanda.

A folio 9, con fecha 15 de septiembre de 2022, comparece doña CAROLINA VÁSQUEZ ROJAS, cédula nacional de identidad número 13.439.600-8, abogada Procurador Fiscal de Santiago, del Consejo de Defensa del Estado, por el Fisco de Chile, ambos domiciliados en Agustinas N° 1225, piso 4°, comuna de Santiago, contestando la demanda de autos, solicitando el rechazo de la acción de indemnización de perjuicios deducida por don Néstor Ciro Burgos Saavedra, en su calidad de víctima de detención, tortura y apremios ilegítimos y de doña Lidia Del Carmen González y Pamela Beatriz Burgos González en sus calidades de cónyuge y de hija del demandante



Foja: 1

principal, respectivamente, en base a las excepciones, defensas y alegaciones que expone.

En primer lugar, indica que doña Lidia del Carmen González Mena y doña Pamela Beatriz Burgos González, cónyuge e hija respectivamente de don Néstor Ciro Burgos Saavedra quien figura como víctima reconocida en Informe Valech, comparecen a título personal e invocando un daño moral por repercusión en su calidad de víctimas de violaciones de derechos humanos, sin haber sido reconocidas por el Estado como víctimas de prisión política y tortura por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Torturas, denominada Comisión Valech I, ni por la Comisión Asesora Presidencial para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura, denominada Valech II. En ese sentido, indica que su parte controvierte los presupuestos de su demanda, debiendo las actoras acreditar la totalidad de aquellos presupuestos necesarios para la procedencia de una indemnización de perjuicios a su respecto, no siendo suficiente invocar solo la relación de parentesco o cercanía con la víctima directa de prisión política y torturas.

En ese sentido, atendida la falta de calidad de víctimas, alega la falta de legitimación activa de las demandantes cónyuge e hija de la víctima directa pues estima que para la indemnización del daño este debe ser personal, actual, real y cierto, de modo que solo quien lo ha sufrido puede demandar su reparación y que si bien el daño reflejo o por repercusión puede considerarse daño personal, este solo puede ser indemnizado dentro de ciertos límites. Señala que su parte no niega que la muerte puede generar un daño reflejo para sus familiares y que en el caso sublite, si bien no resta gravedad a los hechos relatados en el libelo, no puede considerarse que se encuentre englobado en ninguno de los dos casos que la doctrina y la jurisprudencia han planteado como causantes de daño reflejo (muerte o incapacidad).

Menciona que la jurisprudencia francesa limitó el daño moral solo al directamente afectado sobreviviente del hecho dañoso, pero que actualmente se ha extendido a casos en que la víctima directa no ha fallecido, en casos de gran invalidez. El mismo principio se ha impuesto en la jurisprudencia



Foja: 1

española, en la que se exige que las lesiones corporales de la víctima inicial sean graves para que el daño moral, por rebote, sea objeto de compensación económica. Así, extender el daño por repercusión a extremos tales como los descritos en la demanda, por hechos ocurridos hace décadas, genera un injusto que afecta a la legitimidad del interés protegido con la responsabilidad civil y por ende la acción que pretende debe ser rechazada.

En subsidio, alega la improcedencia de las indemnizaciones dinerarias demandadas por la cónyuge e hija, por limitación de la justicia transicional y por ya haber sido reparadas. Señala que la indemnización solicitada en autos se desenvuelve en el marco de infracciones a los Derechos Humanos, cuya comprensión se da en el ámbito de la justicia transicional, tanto en el derecho interno como en el internacional, ello porque en este ámbito recae la necesidad de que la sociedad reconozca los errores del pasado para su no repetición en el futuro, así como la necesidad de decidir qué proporción de los recursos económicos públicos deberá destinarse a la reparación de las víctimas; así, no es extraño que distintos sistemas indemnizatorios privilegien a algunos grupos en desmedro de otros cuyos intereses puedan estimarse más lejanos. En este escenario, la Ley 19.992 constituyó un esfuerzo trascendental de reparación, pues hizo posible atender a la necesidad de reparar económicamente los familiares más directos, mediante prestaciones en dinero con lo que, sin desfinanciar la caja fiscal, permitió y permite que numerosas víctimas reconocidas obtengan mes a mes una reparación monetaria, para lo cual se determinó una indemnización legal que optó por beneficiar al núcleo familiar más cercano, esto es, padres, hijos y cónyuge, pretiriendo al resto de las personas ligadas por vínculos de parentesco o de amistad y cercanía, quienes fueron excluidas, sin perjuicio de otras reparaciones satisfactivas.

De esta manera, es claro que siendo los recursos escasos, tiene que haber un límite que ponga fin a la línea de extensión reparativa y en el caso de las demandantes de autos, han sido preteridas por la ley como beneficiarias de una asignación en dinero por el daño que invocan, sin que ello implique afirmar que no hayan obtenido una reparación satisfactiva por otra vía. En suma, la pretensión económica demandada es improcedente





Foja: 1

porque, en la especie, existe un sistema legal de reparación pecuniaria en se ha excluido a los parientes y en que los titulares de la acción de reparación son los afectados directamente por el daño.

Sin perjuicio de lo anterior, añade que las demandantes Lidia del Carmen González Mena y doña Pamela Beatriz Burgos González han obtenido igualmente otras formas de reparación satisfactiva, pues el hecho de no haber obtenido un pago en dinero por la preterición legal no significa que no hayan obtenido reparación por el daño sufrido, puesto que los diferentes programas de reparación incluyen beneficios de salud, gestos simbólicos u otras medidas análogas diversas a la simple entrega de dinero.

En ese sentido, señala que la reparación a las víctimas de violaciones a los derechos humanos también se ha concretado mediante reparaciones simbólicas a través de actos de reconocimiento y recuerdo de los hechos y, sostiene además, que diversas sentencias ya han insistido en que el propósito de estas leyes fue precisamente "reparar el daño moral y patrimonial que ha afectado a los familiares directos de las víctimas", lo que constituye un factor congruente con resoluciones de Tribunales Internacionales, relativas a la procedencia de la indemnización.

Por otro lado, opone la excepción de reparación integral, alegando la improcedencia de la indemnización solicitada por haber sido ya indemnizado el demandante principal Néstor Ciro Burgos Saavedra, alegando que la Ley N° 19.123, así como otras conexas, como la Ley N° 19.992, han establecido distintos mecanismos mediante los cuales se ha concretado la compensación a víctimas de violaciones a los derechos humanos y a familiares directos de éstas, mediante tres tipos de compensaciones: a) Reparaciones mediante transferencias directas de dinero; b) Reparaciones mediante la asignación de derechos sobre prestaciones estatales específicas; y c) Reparaciones simbólicas. Explica que por medio de estos tres tipos de reparaciones se ha concretado el objeto de nuestro particular proceso de justicia transicional, que en lo que a este acápite respecta, busca no otra cosa que la precisa reparación moral y patrimonial de las víctimas.

Luego, analiza cada una de estas compensaciones, señalando, respecto a la reparación mediante transferencias directas de dinero, que en término de



Foja: 1

costos generales para el Estado de Chile, este tipo de indemnizaciones ha significado a diciembre de 2019, un desembolso total de \$992.084.910.400.

Indica que la actora ha recibido beneficios pecuniarios al amparo de la Ley 19.992, y sus respectivas modificaciones, conforme se acreditará en la etapa procesal pertinente.

En cuanto a las reparaciones mediante asignación de derechos sobre prestaciones estatales específicas, explica que se concedió a los beneficiarios de la Ley N° 19.234, como de la Ley N° 19.992, el derecho a gratuidad en las prestaciones médicas otorgadas por el Programa de Reparación y Atención Integral de Salud (PRAIS), ofreciéndose asimismo el apoyo técnico y de rehabilitación física para la superación de lesiones físicas que sean producto de la prisión política o tortura.

Adicionalmente, se incluyeron entre dichos beneficios, aquellos de carácter educacional, consistentes en la continuidad y gratuidad de los estudios básicos, medios o superiores, ello a cargo de la División de Educación Superior del Ministerio de Educación, además de haberse concedido beneficios en vivienda.

Finalmente, y en lo relativo a las reparaciones simbólicas, refiere que parte importante de la reparación por los daños morales causados a las víctimas de DD.HH se realiza a través de actos positivos de reconocimiento y recuerdo de los hechos que dieron lugar a aquellas violaciones, destacando la ejecución de diversas obras, como las siguientes: a) La construcción del Memorial del Cementerio General en Santiago en el año 1993; b) El establecimiento, mediante el Decreto N° 121, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, de 10 de octubre de 2006, del Día Nacional del Detenido Desaparecido; c) La construcción del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos; d) El establecimiento, mediante la Ley N° 20.405, del Premio Nacional de los Derechos Humanos; e) La construcción de diversos memoriales y obras a lo largo de todo el país; entre otros.

En susidio, alega la excepción de prescripción extintiva de todos los actores, señalando en primer lugar que las demandantes por repercusión no son víctimas de violaciones a los derechos humanos, por lo que no estamos en presencia de crímenes de lesa humanidad, resultando incuestionablemente



Foja: 1

aplicable la institución de la prescripción.

Señala que tal excepción se deduce con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2332 del Código Civil en relación con el 2497 del mismo, por lo que solicita el rechazo de la demanda en todas sus partes por encontrarse prescrita la acción. Indica que aun entendiendo suspendida la prescripción durante el período de la dictadura militar, iniciada en septiembre de 1973, por la imposibilidad de la víctima de ejercer las acciones legales correspondientes ante los tribunales de justicia y hasta la restauración de la democracia, a la fecha de la notificación de la demanda, esto es el 25 de agosto de 2022, ha transcurrido en exceso el plazo de prescripción extintiva de cuatro años que establece el artículo 2332 del Código Civil.

Como consecuencia de lo anterior, opone la excepción de prescripción de 4 años establecida en el artículo 2332 del Código Civil y, en subsidio y caso de estimarse que la norma anterior no resulta aplicable al caso de autos, opone la excepción de prescripción extintiva de 5 años contemplada para las acciones y derechos en el artículo 2515, en relación con el artículo 2514 del Código de Procedimiento Civil, ya que entre la fecha en que se habría hecho exigible el derecho a indemnización y la anotada fecha de notificación de las acciones civiles que contesta, transcurrió con creces el plazo que establece el citado artículo 2515 del Código Civil.

Al efecto señala que el Pleno de la E. Corte Suprema dictó con fecha de 21 de enero de 2013 sentencia de unificación de jurisprudencia de demandas de indemnización de perjuicios en contra del Fisco de Chile por hechos acaecidos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990 y zanjó esta controversia señalando: que el principio general que debe regir la materia es el de la prescriptibilidad de la acción de responsabilidad civil, de modo que la imprescriptibilidad debe, como toda excepción, ser establecida expresamente y no construida por analogía o interpretación extensiva, que los tratados internacionales invocados, especialmente el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Convenio de Ginebra sobre Tratamiento de los Prisioneros de Guerra y la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de



Foja: 1

Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, no contienen norma alguna que declare imprescriptible la responsabilidad civil y al no existir una norma especial que determine el plazo de prescripción que debe aplicarse en estos casos, debe recurrirse a las reglas generales, que en esta materia está representado por la regulación del Código Civil. Por último estableció que el plazo debe contarse desde que los titulares de la acción indemnizatoria tuvieron conocimiento y contaron con la información necesaria y pertinente para hacer valer el derecho al resarcimiento del daño ante los tribunales de justicia.

Por todo lo expuesto solicita el rechazo de la demanda por encontrarse prescritas las acciones civiles deducidas.

En tercer término, en cuanto al daño e indemnización reclamada, en subsidio de las defensas y excepciones planteadas precedentemente, controvierte el monto solicitado, atendida la naturaleza de la indemnización solicitada, considerando excesiva la suma.

Hace presente que en cuanto al daño moral pretendido por la cónyuge e hija de la víctima Néstor Ciro Burgos Saavedra, se debe considerar la controversia de los hechos y sus consecuencias jurídicas hecha por la parte demandada, debiendo los actores acreditar las circunstancias fácticas de los daños pretendidos, así como su existencia, y el vínculo de causalidad entre éstos.

En ese sentido, hace presente que la demandante Pamela Beatriz Burgos González nació el 17 de septiembre de 1982, según consta del respectivo certificado de nacimiento acompañado a la demanda, por lo tanto, a la fecha de detención de su padre no había nacido, y su conocimiento de los hechos es, cuando menos, confuso y ajeno, lo cual lógicamente diluye el vínculo de causalidad entre el hecho base y los daños pretendidos a su respecto, por cuanto los perjuicios que señala haber sufrido podrían tener una multiplicidad de causas distintas a la detención sufrida por su padre.

Indica que, en el eventual caso de acogerse una indemnización para la cónyuge e hija de la víctima, esta no podría ser del mismo monto para la víctima directa de detención y apremios, pues los perjuicios sufridos de que da cuenta la Comisión Valech, supuso importantes dolores físicos con



Foja: 1

eventuales consecuencias posteriores, el que no puede considerarse del mismo modo que el resto de su grupo familiar, quien no sufrió directamente tales graves violaciones a sus derechos humanos, en tanto no sufrieron prisión ni torturas.

Por otro lado, hace presente que la indemnización de perjuicios tiene por objeto restablecer el equilibrio destruido por el hecho ilícito, otorgando a la víctima un valor equivalente a la cuantía del daño sufrido, para ponerla en el mismo estado que tenía antes del acto dañoso, por ende, la indemnización del daño puramente moral no se determina cuantificando, en términos económicos, el valor de la pérdida o lesión experimentada, sino sólo otorgando a la víctima una satisfacción, ayuda o auxilio que le permita atenuar el daño, morigerarlo o hacerlo más soportable, mediante una cantidad de dinero u otro medio, que en su monto o valor sea compatible con esa finalidad meramente satisfactiva, debiendo atenerse a la extensión del daño sufrido por la víctima, siendo las cifras pretendidas en la demanda excesivas teniendo en consideración las acciones y medidas de reparación adoptadas por el Estado de Chile en esta materia y los montos promedios fijados por nuestros tribunales de justicia.

En cuarto lugar y en forma subsidiaria, alega que en todo caso en la fijación del daño moral por los hechos esgrimidos en autos, el tribunal debe considerar todos los pagos recibidos por la actora a través de los años por parte del Estado conforme a las leyes de reparación (, 19.234, 19.992, sus modificaciones y demás normativa pertinente), y que seguirán percibiendo a título de pensión, y también los beneficios extrapatrimoniales que estos cuerpos legales contemplan, pues todos ellos tienen por objeto reparar el daño moral, ya que de no accederse a esta petición subsidiaria implicaría un doble pago por un mismo hecho, lo cual contraría los principios jurídicos básicos del derecho en orden a que no es jurídicamente procedente que un daño sea indemnizado dos veces.

Además de lo alegado precedentemente, hace presente la improcedencia de los reajustes e intereses del modo en que han sido solicitados por la demandante en su libelo, por cuanto los reajustes sólo pueden devengarse en el caso de que la sentencia que se dicte en la causa acoja la demanda y establezca esa



Foja: 1

obligación, y además mientras no exista sentencia firme o ejecutoriada, ninguna obligación tiene de indemnizar, y por tanto, no existe ninguna suma que deba reajustarse. Respecto de los intereses, señala que el artículo 1551 del Código Civil establece expresamente que el deudor no está en mora sino cuando ha sido judicialmente reconvenido y ha retardado el cumplimiento de la sentencia, por consiguiente, en el hipotético caso de que se decida acoger la acción de autos y se condene al pago de una indemnización de perjuicios, tales reajustes e intereses sólo podrán devengarse desde que la sentencia condenatoria se encuentre firme o ejecutoriada y su representado incurra en mora.

Finalmente en cuanto a las costas, hace presente que el Consejo de Defensa del Estado, conforme lo ordenado su ley orgánica, contenida en el DFL N°1 de 1009, de Hacienda, tiene el deber y la obligación legal de actuar en la defensa judicial de los intereses del Fisco de Chile, labor que se debe cumplir utilizando las herramientas, alegaciones, excepciones y defensa que el ordenamiento jurídico contempla, lo que en este caso hace improcedente una condena en costas, por tener motivos plausibles para oponerse a la demanda.

En virtud de todo lo anterior, solicita se rechace la acción indemnizatoria en todas sus partes, con costas; o, en subsidio, rebajar sustancialmente el monto indemnizatorio pretendido.

A folio 13, con fecha 22 de septiembre de 2022, la parte demandante evacuó el trámite de la réplica, dando por reiterando todos los fundamentos de hecho y de derecho expuestos en la demanda.

A folio 15, con fecha 3 de octubre de 2022, la parte demandada evacuó el trámite de la réplica, reiterando las alegaciones realizadas en el escrito de contestación de la demanda.

A folio 19, con fecha 12 de octubre de 2022, se recibió la causa a prueba, fijándose como hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos sobre los que deberá recaer ésta.

A folio 39, con fecha 20 de marzo de 2023, se citó a las partes a oír sentencia.

**CONSIDERANDO:**



Foja: 1

**PRIMERO:** Que, con fecha 22 de junio de 2022, comparece don NICOLÁS ALBERTO LEAL SEPÚLVEDA, abogado, en representación de don NÉSTOR CIRO BURGOS SAAVEDRA, doña LIDIA DEL CARMEN GONZALEZ MENA y doña PAMELA BEATRIZ BURGOS GONZALEZ, quien viene en deducir demanda de indemnización de perjuicios en contra del FISCO DE CHILE, representado- en su calidad de Presidente del Consejo de Defensa del Estado- por Juan Antonio Peribonio Poduje, todos ya individualizados, solicitando se condene al demandado al pago de \$200.000.000.- para don Néstor Ciro Burgos Saavedra en su calidad de víctima directa y \$100.000.000.- para doña Lidia del Carmen González Mena y doña Pamela Beatriz Burgos González en su calidad de víctimas por repercusión, por las razones de hecho y de derecho expuestos en la parte expositiva de la sentencia, las cuales se dan por reproducidas para todos los efectos legales.

**SEGUNDO:** Que, con fecha 15 de septiembre de 2022, comparece doña CAROLINA VÁSQUEZ ROJAS, abogada Procurador Fiscal de Santiago, del Consejo de Defensa del Estado, por el Fisco de Chile, contestando la demanda de autos, solicitando el rechazo de la acción de indemnización de perjuicios deducida por don Néstor Ciro Burgos Saavedra, en su calidad de víctima de detención, tortura y apremios ilegítimos y de doña Lidia Del Carmen González y Pamela Beatriz Burgos González en sus calidades de cónyuge y de hija del demandante principal, respectivamente, en base a las excepciones, defensas y alegaciones relatadas en la parte expositiva de la sentencia.

**TERCERO:** Que, a fin de acreditar los fundamentos de su acción, la parte demandante rindió la siguiente prueba:

- 1.- Copia de Nómina de casos de Detenidos/as Desaparecidos/as y Ejecutados/as Políticos Reconocidos/ as por la Comisión Valech I, donde se ve reflejada la demandante bajo el número 3583 de dicha lista.
- 2.- Copia 1 de Certificado de Matrimonio entre don Néstor Ciro Burgos Saavedra y doña Lidia Del Carmen González Mena emitido con fecha 20 de junio de 2022.



Foja: 1

3.- Copia de Certificado de Nacimiento de doña Pamela Beatriz Burgos González, emitido con fecha 20 de junio de 2022.

4.- Fallo de casación en Episodio “Comando Conjunto, víctimas: Salinas, Pacheco y Gianelli. Rol N° 5831-2013.

5.- Fallo de casación en Episodio “Torres de San Borja”, víctimas: Montecinos Slaughter, Adler Zulueta, Díaz Agüero, y otros. Rol N° 2918-2013.

6.- Fallo causa “Marcone con Fisco de Chile”, Rol 22856-2015, de fecha 29 de Diciembre de 2015.

7.- Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de fecha 29 de noviembre de 2018, en causa caratulada “Órdenes Guerra y otros vs Chile”, Rol CDH-2-2017.

8.- Sentencia de la Excma. Corte Suprema, Rol N° 1092-15, dictada el día 14 de septiembre de 2015.

9.- Informe de la Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura (VALECH). Reflexiones y Propuestas de S.E. el Presidente de la República, Ricardo Lagos Escobar; págs. 5 a la 10, inclusive.

10.- Informe de la Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura (VALECH) Capítulo V: Métodos de Tortura HUMILLACIONES Y VEJAMENES, págs. 239 a la 241, inclusive.

11.- Informe de la Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura (VALECH) Capítulo V: Métodos de Tortura. GOLPIZAS REITERADAS, págs. 226 a la 228, inclusive.

12.- Informe de la Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura (VALECH). Capítulo V: Métodos de Tortura. LESIONES CORPORALES DELIBERADAS, págs. 229 a la 230, inclusive.

13.- Informe de la Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura (VALECH). Capítulo V: Métodos de Tortura. AMENAZAS, págs. 236 a la 237, inclusive.

14.- Informe de la Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura (VALECH) Capítulo V: Métodos de Tortura APLICACIÓN DE ELECTRICIDAD, págs. 233 a la 236, inclusive.





Foja: 1

15.- Informe de la Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura (VALECH). Capítulo V: Métodos de Tortura PRESENCIAR TORTURAS DE OTROS, pág. 244 a la 245, inclusive.

16.- Informe de la Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura (VALECH) Capítulo V: Métodos de Tortura PRIVACIONES DELIBERADAS DE MEDIOS DE VIDA, pág. 248.

17.- Informe de la Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura (VALECH). Capítulo V: Métodos de Tortura CONFINAMIENTO EN CONDICIONES INFRAHUMANAS, págs. 247 a la 248, inclusive.

18.- Informe de la Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura (VALECH). Capítulo V: Métodos de Tortura. POSICIONES FORZADAS, págs. 232 a la 233, inclusive.

19.- Copia de la página N° 100, del Informe de la Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura, que da cuenta de haberse acreditado por el Estado de Chile la calidad de torturado del demandante don(a) NÉSTOR CIRO BURGOS SAAVEDRA, cédula nacional de identidad número 4.456.004-6, Registro de Torturados N.º 3583.

20.- Informe del Programa de Asistencia Integral de Salud, PRAIS, del Ministerio de Salud, denominado **Norma técnica** para la atención de salud de personas afectadas por la represión política ejercida por el Estado en el periodo 1973-1990.

21.- Copia digital timbrada de carpeta confidencial del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) correspondiente al demandante principal de autos don NÉSTOR CIRO BURGOS SAAVEDRA, cédula nacional de identidad número 4.456.004-6.

22.- Informe Psicológico sobre los efectos de la prisión política y tortura padecida por el demandante de autos, Néstor Ciro Burgos Saavedra elaborado y suscrito por la Psicóloga Clínica particular, doña Massiel Cerna Cuevas, de fecha 13 al 20 de octubre del año 2022.

23.- Informe Psicológico sobre los efectos de la prisión política y tortura padecida por el demandante principal de autos, Néstor Ciro Burgos Saavedra y como ésta afecto a su cónyuge, demandante por repercusión doña Lidia del Carmen González Mena elaborado y suscrito por el Psicóloga Clínica



Foja: 1

particular, doña Massiel Cerna Cuevas, de fecha 13 al 20 de octubre del año 2022.

24.- Informe Psicológico sobre los efectos de la prisión política y tortura padecida por el demandante principal de autos, Néstor Ciro Burgos Saavedra y como ésta afecto a su hija, demandante por repercusión doña Pamela Beatriz Burgos González elaborado y suscrito por el Psicóloga Clínica particular, doña Massiel Cerna Cuevas, de fecha 21 de octubre del año 2022.

25.- Copia digital de certificado de título de la psicóloga particular doña Massiel Cerna Cuevas.

**CUARTO:** Que, por su parte, la parte demandada solicitó oficio al Instituto de Previsión Social a fin de informar sobre los beneficios en dinero y pensiones vitalicias recibidas por el demandante principal a través de las leyes de reparación, cuya respuesta consta a folio 14, consistente en informe n°4792-9428 de fecha 6 de octubre de 2022, respecto del demandante don Néstor Ciro Burgos Saavedra.

**QUINTO:** Que apreciando la prueba producida en autos en forma legal, aplicando lo prescrito en los artículos 342, 346 y 384 del Código de Procedimiento Civil en relación con lo dispuesto en los artículos 1700, 1702 y 1706 del Código Civil, ha de tenerse por acreditado que:

1. Doña Lidia Del Carmen González Mena es cónyuge de don Néstor Ciro Burgos Saavedra.
2. Doña Pamela Beatriz Burgos González es hija de don Néstor Ciro Burgos Saavedra.
3. Que don Néstor Ciro Burgos Saavedra se encuentra calificado como víctima en el listado de prisioneros políticos y torturados, elaborado por la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura, conocida como Comisión Valech I, en el registro N°3583.
4. Don Néstor Ciro Burgos Saavedra ha recibido los beneficios de reparación correspondientes a la pensión establecida en la Ley 19.234, 19.992, 20.134 y el aporte único de la Ley 20.874, junto con aguinaldos, con una pensión actual ascendente a \$202.638, en tanto reparaciones dada su calidad de víctima de Prisión Política y Tortura (Ley Valech).



Foja: 1

**SEXTO:** Que, la primera defensa planteada por el Fisco de Chile dice relación con la falta de legitimación activa de las demandantes cónyuge e hija de la víctima directa, pues estima que para la indemnización del daño este debe ser personal, actual, real y cierto, de modo que solo quien lo ha sufrido puede demandar su reparación y que si bien el daño reflejo o por repercusión puede considerarse daño personal, este solo puede ser indemnizado dentro de ciertos límites.

**SÉPTIMO:** Que, para una adecuada resolución, resulta necesario tener presente que la mera capacidad para comparecer en juicio no es suficiente para formular pretensiones y oponerse a ella en un procedimiento, sino que se requiere además *legitimatio ad causam* o capacidad para obrar, esto es, aquella consideración especial que tiene la ley dentro de cada procedimiento respecto de las personas que se hallan en una determinada relación con el objeto del litigio y, en virtud de la cual, exige que dichas personas sean las que figuran como partes del procedimiento para que la pretensión pueda ser examinada en cuanto al fondo. Así, la legitimación hace referencia a una determinada relación del sujeto con la situación jurídica sustancial que se deduce en juicio, la que se concreta generalmente en su titularidad, siendo su contenido el que delimita aquel perteneciente a la legitimación. (ROMERO, Alejandro. (2007). Curso de Derecho Procesal Civil. La acción y protección de los derechos. Tomo I, primera edición, p. 88.)

**OCTAVO:** Que, no obstante la única de las demandantes que ha sido oficialmente reconocida como víctima de violación de derechos humanos es don Néstor Ciro Burgos Saavedra, lo cierto es que dicha calidad no se constituye como un requisito *sine qua non* para la interposición de la presente demanda de indemnización de perjuicios. En el caso de autos, no debe obviarse que las demandantes cónyuge e hija de la víctima tienen un interés legítimo en su pretensión, toda vez que demandan la indemnización del daño propio derivado de la detención de su cónyuge y padre, respectivamente, en virtud de las consecuencias y afectación en sus propias vidas, lo que en todo caso, no las exime de la carga de probar sus asertos.

Por ende, es dable concluir que tanto la cónyuge como la hija de la víctima directa sí se encuentran legitimadas para obrar en estos autos y por ende ha



Foja: 1

de rechazarse tal alegación, sin perjuicio de lo que se resolverá en cuanto al fondo de la acción.

**NOVENO:** Que, en subsidio de lo anterior, el demandado ha alegado la improcedencia de las indemnizaciones dinerarias demandadas por doña Lidia Del Carmen González Mena y doña Pamela Beatriz Burgos González, así como por don Néstor Ciro Burgos Saavedra, por limitación de la justicia transicional y por ya haber sido reparadas, fundado en que leyes como la Ley 19.123 optaron por beneficiar al núcleo familiar más cercano, esto es, padres, hijos y cónyuge, pretiriendo al resto de las personas ligadas por vínculos de parentesco o de amistad y cercanía, de modo que los titulares de la acción de reparación son los afectados directamente por el daño, sin perjuicio de que las demandantes doña Lidia Del Carmen González Mena y doña Pamela Beatriz Burgos González hayan obtenido igualmente otras formas de reparación satisfactiva en virtud de programas de reparación incluyen beneficios de salud, gestos simbólicos u otras medidas análogas diversas a la simple entrega de dinero.

**DÉCIMO:** Que, al respecto, ha de señalarse que si bien el Estado de Chile ha hecho un formal reconocimiento de una serie de hechos constitutivos de violación de los derechos humanos acaecidos a contar del 11 de septiembre de 1973 a través del mensaje que creó la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación y a través de la “Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, para el esclarecimiento de la verdad acerca de las violaciones de derechos humanos en Chile”, conocida como Comisión Valech y se han establecido mediante diversas Leyes pensiones anuales de reparación, aguinaldos, bonos y otras en un intento de reparar a las víctimas por violaciones a los derechos humanos, como reconocimientos a sus familiares; de ninguna forma aquellas constituyen una indemnización por el daño moral sufrido particularmente por cada persona afectada, sino que constituyen más bien un beneficio de carácter social, sin considerar los elementos propios y personales a consecuencia de los hechos por los cuales se demanda.

**UNDÉCIMO:** Que, en cuanto a la improcedencia de la indemnización por ya haber sido reparado don Néstor Ciro Burgos Saavedra cabe señalar que, el artículo 1° de la Ley 19.992 establece una pensión anual de reparación en



Foja: 1

beneficio de las víctimas directamente afectadas por violaciones a los derechos humanos individualizadas en el anexo "Listado de prisioneros políticos y torturados", de la Nómina de Personas Reconocidas como Víctimas, que forma parte del Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, creada por el Decreto Supremo N° 1.040, de 2003, del Ministerio del Interior.

A su vez el artículo 2° prescribe que la pensión anual establecida en el artículo 1° ascenderá a \$1.353.798.- para aquellos beneficiarios menores de 70 años de edad, a \$1.480.284 para aquellos beneficiarios de 70 o más años de edad pero menores de 75 años y a \$1.549.422 para aquellos beneficiarios de 75 o más años de edad; que se pagará en 12 cuotas mensuales de igual monto y se reajustará en conformidad a lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto Ley N°2.448, de 1979, o en las normas legales que reemplacen la referida disposición. La pensión establecida en el inciso precedente será incompatible con aquellas otorgadas en las Leyes 19.234, 19.582 y 19.881, pudiendo quienes se encuentren en tal situación optar por uno de estos beneficios en la forma que determine el Reglamento.

Por su parte el artículo 4° de la indicada ley señala que la pensión otorgada por esta ley será compatible con cualquiera otra, de cualquier carácter, de que goce o que pudiere corresponder al respectivo beneficiario, incluidas las pensiones asistenciales del Decreto Ley N° 869, de 1975. Será, asimismo, compatible con cualquier otro beneficio de seguridad social establecido en las leyes.

A su vez, la Ley 19.234 estableció beneficios previsionales por gracia para personas exoneradas por motivos políticos (abono de tiempo por gracia, pensión con transacción extrajudicial y pensión no contributiva, última de carácter vitalicio, que otorga el Presidente de la República, a aquellos exonerados políticos que cumplan con los requisitos para ello).

**DUODÉCIMO:** Que las normas legales recientemente relacionadas es posible concluir que la pensión anual de reparación constituye más bien un beneficio de carácter social y no una indemnización del daño moral para



Foja: 1

reparar a aquellos que sufrieron privación de libertad y torturas por razones políticas, por actos de agentes del Estado o de personas a su servicio en el período comprendido entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990.

En efecto, no aparece en la determinación de su monto que se hayan considerado los elementos propios y personales de quienes han debido soportar injustas y vejatorias privaciones de libertad, acompañadas de apremios físicos ilegítimos, lo cual constituye requisito fundamental a la hora de fijar una indemnización que no puede ser entendida sino con la finalidad de reparar o compensar un daño cierto y determinado, optando el actor por la pensión otorgada en la Ley N°19.992.- como puede inferirse de la lectura del detalle de beneficios que recibe.

Es así que no procede imputar a la indemnización debida a don Néstor Ciro Burgos Saavedra a las cantidades que en calidad de beneficiario de las reparaciones y pensiones haya recibido ya en su respectiva calidad de víctima de violaciones a los derechos humanos, por lo que no cabe sino desestimar la excepción de reparación integral.

**DÉCIMO TERCERO:** Que, enseguida corresponde hacerse cargo de la excepción de prescripción alegada por el Fisco demandado en su escrito de contestación. Al respecto, cabe tener presente que al encontrarnos frente a violaciones a los derechos humanos –calificación que debe darse a los hechos fijados en el motivo octavo del fallo–, el criterio rector en cuanto a la fuente de la responsabilidad civil se encuentra en normas y principios del Derecho Internacional de Derechos Humanos y ello ha de ser necesariamente así por cuanto este fenómeno de graves transgresiones a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana es posterior al proceso de codificación, que por lo mismo no lo considera pues, por una parte, responde a criterios claramente ligados al interés privado y, por otra, por haber sido la cuestión de los derechos fundamentales normada y conceptualizada sólo en la segunda mitad del siglo XX.

**DÉCIMO CUARTO:** Que, conforme a lo anteriormente expuesto, no cabe calificar la acción indemnizatoria deducida en autos por la parte demandante como de índole o naturaleza meramente patrimonial, porque los hechos en



Foja: 1

que se la sustenta son ajenos a una relación contractual –vinculada a un negocio común –o extracontractual, sino configurativas de un delito de lesa humanidad del cual emana, además de la acción penal, una civil de carácter humanitario. Y es de esta clase en razón de que la pretensión del actor don Néstor Burgos se fundamenta en las torturas de que fue víctima, en completa indefensión, por agentes del Estado que disponían de gran poder de coerción mismos hechos del cual emana la pretensión indemnizatoria de la cónyuge e hija de aquel.

**DÉCIMO QUINTO:** Que, en efecto, no puede negarse el carácter de delito de lesa humanidad a aquel que sirven de fuente u origen a la acción impetrada en la demanda.

Así, se ha constatado que el demandante Néstor Burgos Saavedra aparece incorporado en la nómina de prisioneros políticos y torturados anexada al informe elaborado por la denominada Comisión Valech I, de modo que en lo tocante a la indemnización de perjuicios resulta aplicable, en relación con el acceso a la justicia para las víctimas y sus familiares a fin de conocer la verdad y recibir la reparación correspondiente, los convenios o tratados internacionales, aquellas reglas de Derecho Internacional que se consideran *ius cogens* y el derecho consuetudinario internacional, sin perjuicio de encontrarse también estipuladas en la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, cuyo artículo 27 dispone que “*el Estado no puede invocar su propio derecho interno para eludir sus obligaciones internacionales*” y que de hacerlo comete un hecho ilícito que compromete su responsabilidad internacional (Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano, Edición 2000, Humberto Nogueira Alcalá, “Las Constituciones Latinoamericanas”, página 231).

**DÉCIMO SEXTO:** Que, los derechos fundamentales constituyen un sistema construido a partir de criterios particulares, propios de la naturaleza del hecho, y por tal razón no es posible interpretar las normas que los regulan de manera aislada, pues toda conclusión alcanzada en tales circunstancias necesariamente será contraria a este sistema jurídico. Cuando las referidas normas dejan de aplicarse a un caso que estaban llamadas a regir se produce su contravención y se infringe también la regla del artículo 5° de la



Foja: 1

Constitución Política de la República que, junto con reconocer el carácter vinculante de los instrumentos de Derecho Internacional, establece que “*el ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana*” y el deber de los órganos del Estado de respetar y promover los derechos fundamentales, entre los que también ha de entenderse el de obtener una indemnización como la que ha sido reclamada en estos autos.

**DÉCIMO SÉPTIMO:** Que, el derecho de la víctima a recibir la reparación correspondiente implica, desde luego, la reparación de todo daño que le haya sido ocasionado, lo que se posibilita con la recepción del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en el Derecho interno chileno, conforme lo dispuesto en el ya citado artículo 5° de la Constitución Política.

**DÉCIMO OCTAVO:** Que, analizando ahora los preceptos invocados por el Fisco de Chile en sustento de su pretensión de rechazo de la demanda indemnizatoria, cabe señalar que no resultan atinentes las reglas de Derecho interno previstas en el Código Civil sobre prescripción de las acciones civiles comunes de indemnización de perjuicios al encontrarse éstas en abierta contradicción con las normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que protegen el derecho de recibir la reparación correspondiente a víctimas y familiares de éstas.

Asimismo, en tanto el Fisco acepta explícitamente la posibilidad de que el plazo de la prescripción extintiva que alega se compute desde una época distinta de aquella que señala el artículo 2332 del Código Civil, no puede sino concluirse que hay también una clara aceptación de que los preceptos de este cuerpo legal no son necesariamente los llamados a regir un caso como el planteado y que pueden, por lo mismo, dejar de tener aplicación sin que esta omisión importe contravenirlos.

No debe olvidarse que la obligación indemnizatoria está originada para el Estado, tratándose de la violación de los Derechos Humanos, no sólo por la Constitución sino también por los Principios Generales del Derecho Humanitario y de los Tratados Internacionales sobre la materia, como expresión concreta de los mismos, de tal suerte que las normas del derecho





Foja: 1

común interno se aplicarán sólo si no están en contradicción con esta preceptiva.

**DÉCIMO NOVENO:** Que, entonces, cuando el Código Civil en su artículo 2497 señala que las reglas de prescripción “se aplican igualmente a favor y en contra del Estado”, debe considerarse que ello no resulta pertinente a esta materia, atendida su particular naturaleza según se ha puesto de manifiesto y es por ello que debe darse aplicación a las normas contenidas en los artículos 1.1 y 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

En efecto, de acuerdo con este último precepto la responsabilidad del Estado por esta clase de ilícito queda sujeta a reglas de Derecho Internacional, las que no pueden ser incumplidas a pretexto de hacer primar disposiciones de Derecho interno. A este respecto debe también tenerse presente el carácter consuetudinario de estas normas y que atendida su naturaleza no son creadas sino simplemente reconocidas por los Estados, de lo que deriva su ineludible aplicación, de manera tal que produciéndose un hecho ilícito imputable a un Estado la responsabilidad de éste surge de inmediato por la violación de la norma de Derecho Internacional, con el consecuente deber de reparación y de hacer cesar las consecuencias indeseadas.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha aclarado, además, que el artículo 63.1 de la Convención no remite al Derecho interno para el cumplimiento de la responsabilidad del Estado, de modo que la obligación no se establece en función de los defectos, imperfecciones o insuficiencias del derecho nacional, sino con independencia del mismo (Caso Velásquez Rodríguez).

**VIGÉSIMO:** Que, en el mismo sentido el artículo 131 de la Convención de Ginebra pretende hacer efectiva la responsabilidad que resulta de esta clase de hechos y no se limita a la de carácter penal. Lo mismo ocurre con el artículo 27 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, vigente desde el 27 de enero de 1980, que previene –según ya se afirmó– que los Estados no pueden invocar su propio derecho interno para eludir sus obligaciones internacionales -en la especie, la de establecer responsabilidades



Foja: 1

–incumplimiento del que ciertamente derivaría responsabilidad por un ilícito de índole internacional. Lo anterior conduce a sostener que el derecho a la reparación es un derecho fundamental, esto es, uno de aquellos que los Estados declaran para asegurar y hacer posible la convivencia democrática, el que por su naturaleza es imprescriptible.

**VIGÉSIMO PRIMERO:** Que, además, debe tenerse en consideración que el sistema de responsabilidad del Estado deriva del inciso 3° del artículo 6° de la Constitución Política de la República y del artículo 3° de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, y que de aceptarse la tesis del Fisco demandado quedarían inaplicadas.

Específicamente en lo que se refiere a la norma de mayor jerarquía, puede señalarse que el referido artículo 6° se encuentra comprendido en el capítulo denominado “Bases de la Institucionalidad”, por lo que es marco y cimiento del ejercicio de la jurisdicción y contiene el imperativo categórico que se le impone al tribunal nacional a descartar la aplicación de las normas que no se conformen o sean contrarias a la Constitución.

**VIGÉSIMO SEGUNDO:** Que, no es posible sostener la inexistencia de responsabilidad del Estado en esta clase de infracciones por la prescripción de la acción civil reparatoria, porque el valor justicia que orienta el Derecho y la convivencia social rechaza tal posibilidad, al extremo que el Derecho Internacional ha recogido el criterio que predica que todo daño que sea su consecuencia ha de ser reparado. Además, tal alegación desconoce la naturaleza del hecho que motiva la indemnización solicitada cuando reclama el sistema de responsabilidad extracontractual, porque si bien es cierto que la cuestión está desvinculada de lo meramente convencional o contractual, ello no implica que haya de hacerse aplicación de este régimen, que comprende la cuestión de la culpa y el dolo referidos a un agente determinado. En un caso como el de la especie no resulta necesario ocuparse de acreditar estos supuestos de responsabilidad en los causantes directos del daño, porque inequívocamente los hechos no han podido acaecer sino porque el mismo Estado actuó de manera dolosa cuando desarrolló en forma reiterada conductas lesivas a los derechos fundamentales, esto es, cuando integrantes



Foja: 1

de sus órganos de seguridad se involucraron en torturas, desapariciones forzadas y muertes, entre otros graves atentados.

**VIGÉSIMO TERCERO:** Que, en el caso de las víctimas “por rebote o repercusión”, deberá aplicarse el mismo criterio, pues no podría pretenderse que con ocasión del mismo hecho generador de los daños, su cónyuge e hija se encontraran privadas de interponer la presente acción de indemnización de perjuicios mientras que tal derecho subsista para la víctima. Tal interpretación no solo atentaría contra la congruencia jurídica, sino que, además, privaría a su cónyuge e hija al derecho a la reparación en su calidad de víctimas indirectas de los tratos crueles, inhumanos o degradantes provocados a su padre, pues tal sufrimiento evidentemente habrá de victimizar a sus familiares inmediatos.

**VIGÉSIMO CUARTO:** Que, en síntesis, tratándose la tortura de un crimen de lesa humanidad cuya acción penal persecutoria es imprescriptible, no resulta coherente entender que la acción civil indemnizatoria esté sujeta a las normas sobre prescripción establecidas en la ley civil interna, ya que ello contraría la voluntad expresa manifestada por la normativa internacional sobre derechos humanos, integrante del ordenamiento jurídico nacional por disposición del inciso 2° del artículo 5° de la Carta Fundamental, que consagra el derecho de las víctimas y otros legítimos titulares a obtener la debida reparación de los perjuicios sufridos a consecuencia del acto ilícito. Por consiguiente, cualquier diferenciación efectuada por el juez en orden a separar ambas acciones y otorgarles un tratamiento diferenciado es discriminatoria y no permite al ordenamiento jurídico guardar la coherencia que se le reclama.

**VIGÉSIMO QUINTO:** Que, en relación con el daño, presupuesto necesario para que surja la obligación de indemnizar los perjuicios, ha de señalarse que a pesar de su naturaleza particular el daño moral debe ser probado por quien lo reclama, toda vez que éste constituye un presupuesto para el origen de la responsabilidad civil, por tanto aquel que intente beneficiarse de la concurrencia de la misma tendrá la carga probatoria de demostrar su existencia.

El daño moral consiste, equivale y tiene su fundamento en el sufrimiento,



Foja: 1

dolor o molestia que el hecho ilícito ocasiona en la sensibilidad física o en los sentimientos o afectos de una persona, adoptando el término “dolor” un sentido amplio, comprensivo del miedo, la emoción, la vergüenza, la pena física o moral ocasionado por el hecho dañoso.

También puede ser entendido, tal como lo hace el profesor René Abeliuk Manasevich, como un menoscabo de un bien no patrimonial, en cuanto dolor, pesar, angustia y molestias psíquicas que sufre una persona en sus sentimientos, consecuencias del hecho ilícito; un hecho externo que afecta la integridad física o moral del individuo. Como puntualiza el profesor Diez Schwerter, “El daño moral consiste en la lesión a los intereses extrapatrimoniales de la víctima, que son aquellos que afectan a la persona y lo que tiene la persona, pero que es insustituible por un valor en moneda, desde que no se puede medir con ese elemento de cambio” (DIEZ Schwerter, José Luis. “El daño extracontractual”. Editorial Jurídica de Chile, pág. 88.).

Así las cosas, a fin de acreditar el punto de prueba número dos, el actor acompañó diversa prueba instrumental, siendo especialmente relevante la carpeta del Instituto Nacional de Derechos Humanos en el cual consta el relato del demandante principal de haber sido víctima de detención ilegal por agentes del estado por un periodo dos meses y veintinueve días, durante el cual fue colgado de los pies, le aplicaban corriente en los genitales, golpes en la espalda con culata de carabina, le enterraban alfileres en las uñas y lo sacaban junto a otros detenidos a hacer trabajos forzados, elemento probatorio que unido al informe psicológico aportado, permiten concluir que aquellas experiencias, que configuran torturas, constituyen situaciones graves que provocan gran dolor físico y mental, con efectos traumáticos como se refiere en este informe, constitutivas en definitiva de daño moral.

Si bien la parte demandada observó los informes psicológicos aportados por el actor, por no ser una prueba idónea para acreditar el daño, lo cierto es que en este caso al ser el demandante una víctima directa del actuar ilegal de agentes del Estado en época de dictadura y atendida la normativa y el contexto que más arriba se ha mencionado, este medio probatorio puede ser valorado conforme al artículo 426 del Código de Procedimiento Civil en



Foja: 1

relación al artículo 1712 del Código Civil, pudiendo el Tribunal presumir, tal como se ha hecho, que las experiencias vividas durante aquellos dos meses y veintinueve días, fueron experiencias dolorosas que provocaron sintomatología traumática, como refiere aquel informe.

Misma conclusión a la que se arribará respecto de doña Lidia Del Carmen González Mena, toda vez que con motivo de la gravedad de los hechos ilícitos descritos y las circunstancias en que estos ocurrieron, es dable sostener que las consecuencias de dichos actos se extendieron al núcleo familiar de la víctima directa, como se desprende de los informes señalados, situación que en su caso particular resulta aún más evidente por el vínculo afectivo que la ligaba a la víctima principal al momento de producirse los hechos descritos en el libelo pretensor, vivenciando un período de angustia por la detención y torturas de don Néstor Burgos Saavedra y ocasionándole secuelas psicológicas que perduran en la actualidad, motivos por los cuales igualmente deberá ser indemnizada en su calidad de víctima por repercusión o rebote.

Sin perjuicio de los anterior, en lo que respecta a la demandante doña Pamela Beatriz Burgos González, si bien este Tribunal no pone en duda el dolor experimentado por la hija de la víctima principal, lo cierto es que igualmente quien dice haber sufrido un perjuicio se encuentra en la obligación de acreditar aquel, no siendo suficiente la valoración que se ha hecho de los informes psicológicos aparejados al proceso por no ser concluyentes ni esclarecedores en orden a determinar los daños reclamados por la actora en su calidad de víctima por repercusión o rebote, lo que tampoco se ve complementado con otro tipo de prueba. En ese sentido, se tendrán en consideración los presupuestos fácticos que rodean su pretensión, en particular, que doña Pamela Burgos González nació el 17 de septiembre de 1982, esto es, aproximadamente nueve años después del acaecimiento del hecho basal, por lo que su aproximación a éste es necesariamente por lo relatado por sus familiares cercanos, tiempo después, de manera tal, que su experiencia no es directa ni coetánea a las circunstancias que afectaron a su padre, lo que necesariamente le permite apreciar lo ocurrido con la distancia que otorga el tiempo, que por supuesto no es la misma de la víctima directa y



Foja: 1

de su cónyuge, ergo el daño tampoco puede estimarse idéntico, lo que sumado a la escasa actividad probatoria de la demandante para acreditar la existencia y la naturaleza de los perjuicios que reclama, así como la causalidad entre los hechos relatados en la demanda y los daños pretendidos a su respecto, torna inviable acoger la acción interpuesta por doña Pamela Beatriz Burgos González, debiendo necesariamente rechazarse la misma.

Finalmente, se han acompañado diversos estudios realizados por expertos en la materia, que dan cuenta de los daños y/o consecuencias dañinas que padecen las víctimas de apremios en contexto de represión política. En ese sentido, se acompaña a folio 24 de autos copia de Norma Técnica para la Atención en Salud de Personas Afectadas por la Represión Política ejercida por el Estado en el período 1973-1990, elaborada por el Ministerio de Salud, de la cual se desprende la existencia de una serie de diagnósticos de trastornos mentales que pueden presentarse en las personas afectadas por este tipo de ilícitos.

De esta manera, se concluye que la detención ilegal y torturas materializadas por agentes del Estado de Chile produjeron un daño moral a los demandantes mencionados precedentemente, encontrándose el Estado obligado a indemnizarlo.

**VIGÉSIMO SEXTO:** Que, en la determinación del *quantum* de la indemnización no se considerarán los pagos ya recibidos del Estado conforme a las leyes de reparación, atendido lo razonado en los motivos que preceden. Así, este se evaluará prudencialmente, teniendo en consideración para ello la violenta ocurrencia de la detención de don Néstor Ciro Burgos Saavedra en septiembre del año 1973 y las perniciosas consecuencias que ello produjo en él y en su entorno familiar.

Por estas razones se fija la indemnización solicitada en la suma de \$30.000.000.- (treinta millones de pesos) para el demandante don Néstor Ciro Burgos Saavedra y \$10.000.000.- (diez millones de pesos) para la demandante doña Lidia Del Carmen González Mena.

**VIGÉSIMO SÉPTIMO:** Que, al haberse determinado en esta sentencia la indemnización que debe satisfacer el demandado, la suma regulada se



Foja: 1

reajustará conforme la variación del Índice de Precios al Consumidor entre la fecha de esta sentencia y el mes que preceda al pago y con intereses desde que el fallo quede ejecutoriado.

**VIGÉSIMO OCTAVO:** Que, de conformidad a lo preceptuado en el artículo 144 del Código de Procedimiento Civil y no habiendo resultado el demandado totalmente vencido, se le eximirá del pago de las costas.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 1437, 1698, 1700, 1706, 2492 y 2518 del Código Civil; 144, 160, 170 y 346 N°3 del Código de Procedimiento Civil; 5° y 6° de la Constitución Política de la República; 3° de la Ley N° 18.575 y demás pertinentes, se resuelve:

I.- Que, **se acoge parcialmente** la demanda interpuesta con fecha 22 de junio de 2022, sólo en cuanto se condena al Fisco de Chile a pagar al demandante don Néstor Ciro Burgos Saavedra la suma de \$30.000.000.- (treinta millones de pesos) y a las demandante doña Lidia Del Carmen González Mena la suma de \$10.000.000.- (diez millones de pesos) a título de indemnización de perjuicios, con los reajustes e intereses consignados en el fundamento trigésimo que precede.

II.- Que se rechaza la demanda en lo demás pedido.

III.- Que, no se condena en costas al Fisco de Chile al no haber sido totalmente vencido.

Regístrese, notifíquese y en su oportunidad, archívese.

**Rol N° 6074-2022.**

**Resolvió Paulina Valenzuela Negrete, Juez Suplente.**

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en **Santiago, nueve de Febrero de dos mil veinticuatro**



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: EXEZXLFDHS

